

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**RAMA JUDICIAL**

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**

**SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, seis (6) de julio de dos mil veintiuno (2021)**

Cumplido el traslado de que trata el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, se procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por GLORIA EUGENIA VASCO LOPEZ contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A., la ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES- (Rad. No. 05001-31-05-014-2018-00156-001).

**ANTECEDENTES**

Pretende la demandante, previa declaración de que el traslado del régimen de prima media que administraba el ISS, hoy Colpensiones, al régimen de ahorro individual, administrado por Porvenir S.A., fue ineficaz o inexistente, se disponga su regreso a la primera administradora, y se ordene a la segunda la devolución de los aportes más los rendimientos; de manera subsidiaria solicita que Porvenir S.A. sea condenada al pago de la pensión de vejez en los mismos términos en que lo hubiera hecho el régimen de prima media; y por último, que se condene a las demandadas en las costas del proceso (fls. 6 a 7).

Como sustento de sus pretensiones manifiesta sucintamente lo siguiente: nació el 17 de octubre de 1962; se afilió inicialmente al ISS el 10 de julio de 1984; se trasladó al régimen de ahorro individual el 1 de octubre de 1999, siendo la AFP Porvenir S.A.; para este cambio de régimen pensional no recibió una asesoría o información completa, veraz y oportuna por parte de la AFP, mucho menos de sus ventajas o desventajas; afirma que solicitó a Colpensiones y a Porvenir el traslado, pero éste le fue negado por

distintas razones; finaliza anotando que cumplió con el requisito de la reclamación administrativa (fls. 2 a 6).

La Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES dio respuesta oportuna a la demanda, en la cual se opuso a todo lo pedido. Aceptó la edad de la demandante, la afiliación al ISS y la reclamación que se le formuló; de los demás hechos dijo que no le constaban. Como excepciones de mérito propuso las que denominó: inexistencia de la obligación de reconocer la afiliación al régimen de prima media por falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción, buena fe e imposibilidad de condena en costas, entre otras (fls. 51 y ss.).

Así mismo, la AFP Porvenir S.A. dio respuesta al libelo introductorio, en la cual se opuso a todas y cada una de las pretensiones formuladas en su contra, bajo el argumento de que no se configuró vicio en el consentimiento, ya que la demandante actuó de forma autónoma y mediando un consentimiento exento de vicios. Frente a los hechos dijo que no le constaban, no eran ciertos o no eran tales. Manifestó que no eran ciertos los hechos que hablaban de una mala o indebida asesoría. Como excepciones de mérito propuso las que denominó: falta de causa para pedir e inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe y prescripción, entre otras (fls. 82 y ss.).

Por estimar que en el proceso debía estar también la Administradora de Pensiones y Cesantías Protección S.A., la a quo, mediante auto del 12 de octubre de 2018, la vinculó al proceso. Esta, luego de ser notificada del auto admisorio de la demanda, dio contestación en el término legal concedido. Aceptó solo la edad de la demandante, y frente a los demás hechos dijo que no le constaban o que no eran ciertos. Fue enfática en manifestar que cumplió con las obligaciones de asesoría y buen consejo, de conformidad con las normas que se encontraban vigentes para la época. Además también fue clara en confesar que el traslado inicial de la demandante al régimen de ahorro individual se dio con DAVIVIR S.A., hoy Protección S.A., y que tuvo vigencia entre el 6 de septiembre de 1999 y el 30 de mayo de 2003. Como consecuencia de la respuesta dada a los hechos, se opuso a la prosperidad de lo pedido. Como excepciones de mérito propuso las de inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, prescripción, buena fe y traslado de los aportes a Porvenir (fls. 193 y ss.).

El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín en sentencia del 29 de octubre de 2020, dispuso:

*“PRIMERO: DECLARAR la ineficacia de la afiliación de la señora GLORIA EUGENIA VASCO LÓPEZ, identificada con C.C. 43.083.755 al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por PROTECCIÓN S.A. y con posterioridad la movilidad entre administradoras, para el caso específico hacia PORVENIR S.A. SEGUNDO: CONDENAR a PORVENIR S.A., a trasladar con destino a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de ésta pro videncia, el valor de la cuenta de ahorro individual de la señora GLORIA EUGENIA VASCO LÓPEZ incluyendo para el efecto cotizaciones y comisiones de administración causadas a partir del 01 de julio de 2003, por la afiliación de la señora VASCO LÓPEZ, con los rendimientos que se hubieren causado como si hubiera permanecido en el RPM. Igualmente, ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, proceder con el recibo de estos dineros. TERCERO: CONDENAR a PROTECCIÓN S.A., a trasladar con destino a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, el valor de las cuotas de administración causadas entre el 01 de noviembre de 1999 al 30 de junio de 2003, por la afiliación de la señora GLORIA EUGENIA VASCO LÓPEZ. CUARTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES a reactivar la afiliación de la señora GLORIA EUGENIA VASCO LÓPEZ al régimen de prima media con prestación definida, sin solución de continuidad. QUINTO: ORDENAR a la sociedad PORVENIR S. A., a comunicar, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, esta decisión a la NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO OFICINA DE BONOS PENSIONALES, para los efectos legales correspondientes. SEXTO: DECLARAR IMPROBADAS las excepciones de mérito propuestas por las demandadas. SÉPTIMO: COSTAS: a cargo de PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A. a favor de la parte demandante, para cuya liquidación se incluirán como Agencias en derecho la suma de \$1.000.000 a cargo de cada una de éstas. SE ABSUELVE de la condena en costas a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES por cuanto dicha entidad actuó en cumplimiento de un deber legal”*

Inconforme con la decisión, las apoderadas de Protección S.A. y Porvenir S.A. interpusieron recurso de apelación.

La primera de ellas, circunscribe su interés a que se revoque la orden dada de devolver o reintegrar a Colpensiones las comisiones de administración que obtuvo en el período en que la demandante estuvo vinculada a la entidad. Sostiene que el proceder de la administradora estuvo ajustado a las normas legales vigentes sobre la materia. Agrega que su conducta se enmarca dentro de la buena fe y al buen proceder, tal como se puede inferir de los rendimientos obtenidos. Finaliza anotando que una orden de esta naturaleza genera un enriquecimiento ilícito en favor de Colpensiones (audio digital, tiempo 1:48:00 y ss.).

Por su parte, la de la segunda AFP, es decir, Porvenir S.A., en lo fundamental pretende con su inconformidad que se revoque la decisión de primer grado y, en su lugar, se

absuelva de todo lo pedido, en tanto estima que para el traslado se cumplieron con todos los requisitos legales existentes para la época, dado que el consentimiento de la demandante estuvo debidamente informado. Insiste en que hubo una debida asesoría. De manera subsidiaria, solicita que se revoque la orden de devolver las comisiones de administración y para el efecto refiere disposiciones legales y una circular de la Superfinanciera. Por último, pide que se revoque la condena en costas, ya que el comportamiento de la AFP siempre estuvo ajustado a la ley y a la buena fe (audio digital, tiempo 1:52:32 y ss.).

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

### CONSIDERACIONES

La Sala restringirá su estudio a los puntos objeto de apelación planteados por las apoderadas de la AFP PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A., de conformidad a lo establecido en el artículo 57 de la Ley 2 de 1984 y artículo 35 de la Ley 712 de 2001. Aquellas condenas u órdenes impuestas a Colpensiones, que puedan entenderse desfavorables o adversas a sus intereses, se estudiarán por el grado de la consulta, atendiendo a las directrices que al respecto ha dado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia.

Fuera de toda discusión, por existir plena prueba de ello, está que la demandante nació el 17 de octubre de 1962 (fl. 27); que se afilió por primera vez al ISS el 10 de julio de 1984 (fl. 28); que se trasladó de esta administradora a la AFP Davivir S.A., hoy Protección S.A., en el mes de septiembre de 1999 (fls. 223); y que luego, dentro del mismo régimen de ahorro individual, se trasladó a Porvenir S.A. en el mes de septiembre de 1999, AFP a la cual se encuentra actualmente afiliada (véase fl. 130).

Con estos presupuestos, en el contexto de los hechos y pretensiones de la demanda, y por supuesto de lo que debe estudiarse por el recurso de apelación, de un lado, y de la consulta, por el otro, lo primero que debe esclarecerse es si el traslado de la demandante del RPMPD al RAIS fue o no ajustado a la ley, y en caso de que no lo hubiere sido, analizar si hay lugar o no a la devolución de aportes, rendimientos y demás ítems. Esto implica establecer, entre otros asuntos, si la voluntad

de la accionante al momento de trasladarse del RPMPD al RAIS estuvo afectada por un vicio en el consentimiento o conducta antijurídica semejante.

Para estos fines, y dado el poder vinculante de la jurisprudencia de las altas cortes, entre otras razones porque una de sus funciones esenciales es la de defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico (art. 86 del CPTSS y 333 del CGP), criterio que ha destacado la Corte Constitucional en muchas de sus decisiones (véase entre otras la SU 354 de 2017), la Sala estima del caso hacer referencia textual a algunos apartes de la sentencia dictada por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia el pasado 8 de mayo (SL1688-2019, Rad. 68838), la cual compendia para el día de hoy, con total claridad y precisión, el estado de la materia en asuntos de ineficacia de traslados de régimen pensional por falta de una adecuada información, las consecuencias de la declaración dada por los afiliados en los documentos de traslado de régimen, la carga de la prueba, y los alcances de la ineficacia y las reasesorías que se realizan con posterioridad al traslado inicial, entre otros. Sobre el deber de información, en ésta quedó dicho:

*“El anterior recuento sobre la evolución normativa del deber de información a cargo de las administradoras de pensiones podría, a grandes rasgos, sintetizarse así:*

Etapa acumulativa	Normas que obligan a las administradoras de pensiones información	Contenido mínimo y alcance del deber de información
Deber De información	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 Art. 97, numeral 1.º del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales Y autonomía personal	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición V la eventual pérdida de beneficios pensionales
Deber información, asesoría y De buen consejo	Artículo 3.º, literal c) de la Ley 1328 de 2009 Decreto 2241 de 2010	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le

		conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarlo
Deber información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	1748 de 2014 Artículo 3.º del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa n.º 016 de 2016	Junto Con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

*1.4 Conclusión: La constatación del deber de información es ineludible*

*Según se pudo advertir del anterior recuento, las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional. Desde luego que con el transcurrir del tiempo, el grado de intensidad de esta exigencia cambió para acumular más obligaciones, pasando de un deber de información necesaria al de asesoría y buen consejo, y finalmente al de doble asesoría. Lo anterior es relevante, pues implica la necesidad, por parte de los jueces, de evaluar el cumplimiento del deber de información de acuerdo con el momento histórico en que debía cumplirse, pero sin perder de vista que este desde un inicio ha existido.*

*Así las cosas, el Tribunal cometió un primer error al concluir que la responsabilidad por el incumplimiento o entrega de información deficitaria surgió con el Decreto 019 de 2012, en la medida que este exista desde la expedición de la Ley 100 de 1993, el Decreto 663 de 1993 y era predicable de la esencia de las actividades desarrolladas por las administradoras de fondos de pensiones, según se explicó ampliamente.*

*Adicionalmente, la Sala no puede pasar por alto la indebida fundamentación con la que la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal de Medellín emitió su sentencia, pues sin razón alguna se limitó a señalar que a partir del Decreto 019 de 2012 es imputable responsabilidad por omisión o cumplimiento deficitario del deber de información a las AFP, sin especificar la norma de ese decreto que le daba sustento a su dicho y sin la construcción de un argumento jurídico que soportara su tesis. Es decir, la sentencia estuvo desprovista de una adecuada investigación normativa y un discurso jurídico debidamente fundamentado.*

En cuanto a las consecuencias de las constancias que se registran en los formularios de afiliación o traslado, se dijo:

***2. El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente. Necesidad de un consentimiento informado***

*Para el Tribunal el consentimiento informado no es predicable del acto jurídico de traslado, pues basta la consignación en el formulario de que la afiliación se hizo de manera libre y voluntaria.*

*La Sala considera desacertada esta tesis, en la medida que la firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos pre impresos de los fondos de pensiones, tales como «la afiliación se hace libre U voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otro tipo de leyendas de este tipo o aseveraciones, no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acreditan un consentimiento, pero no informado.*

*Sobre el particular, en la sentencia CSJ SI. 19447-2017 la Sala explicó:*

*Por demás las implicaciones de la asimetría en la información, determinante para advertir sobre la validez o no de la escogencia del régimen pensional, no solo estaba contemplada con la severidad del artículo 13 atrás indicado, sino además el Estatuto Financiero de la época, para controlarla, imponía, en los artículos 97 y siguientes que las administradoras, entre ellas las de pensiones, debían obrar no solo conforme a la ley, sino soportadas en los principios de buena fe «y de servicio a los intereses sociales» en las que se sancionaba que no se diera información relevante, e incluso se indicaba que «Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado».*

*Ese mismo compendio normativo, en su precepto 98 indica que al ser, entre otras las AFP entidades que desarrollan actividades de interés público, deben emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios, y que «en la celebración de las operaciones propias de su objeto dichas instituciones deberán abstenerse de convertir cláusulas que por su carácter exorbitante puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante», es decir, no se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición, aspecto que soslayó el juzgador al definir la controversia, pues halló suficiente una firma en un formulario [...].*

*De esta manera, el acto jurídico de cambio de régimen debe estar precedido de una ilustración al trabajador o usuario, como mínimo, acerca de las características, condiciones, acceso, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de los riesgos y consecuencias del traslado.*

*Por tanto, hoy en el campo de la seguridad social, existe un verdadero e insoslayable deber de obtener un consentimiento informado (CSJ SI. 19447-2017), entendido como un procedimiento que garantiza, antes de aceptar un ofrecimiento o servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento, ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna.*

*Como consecuencia de lo expuesto, el Tribunal cometió un segundo error jurídico al sostener que el acto jurídico de traslado es válido con la simple*

*anotación o aseveración de que se hizo de manera libre y voluntaria y, por esa vía, descartar la necesidad de un consentimiento informado.*

En materia de carga de la prueba del deber de información, se razonó en los términos siguientes:

*“En consecuencia, si se arguye que a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y suficiente, pese a que debía hacerlo, se dice con ello, que la entidad incumplió voluntariamente una gama de obligaciones de las que depende la validez del contrato de aseguramiento. En ese sentido, tal afirmación se acredita con el hecho positivo contrario, esto es, que se suministró la asesoría en forma correcta. Entonces, como el trabajador no puede acreditar que no recibió información, corresponde a su contraparte demostrar que sí la brindó, dado que es quien está en posición de hacerlo.*

*Como se ha expuesto, el deber de información al momento del traslado entre regímenes, es una obligación que corresponde a las administradoras de fondos de pensiones, y su ejercicio debe ser de tal diligencia, que permita comprender la lógica, beneficios y desventajas del cambio de régimen, así como prever los riesgos y efectos negativos de esa decisión.*

Y por último, en cuanto al alcance de la ausencia del deber de información y de los nulos efectos que pueden generar las reasesorías posteriores, quedó dicho:

*Lo anterior, se repite, sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo. Esto, desde luego, teniendo en cuenta las particularidades de cada asunto.*

...

*Ahora, si bien la AFP brindó a la actora una reasesoría el 26 de noviembre de 2003, en virtud de la cual se concluyó la inconveniencia de continuar en Protección S.A., la Sala considera que este servicio no tiene la aptitud de subsanar el incumplimiento de la obligación de información en que incurrió la AFP al momento del traslado, por dos razones:*

*En primer término, porque el traslado al RAIS implicó la pérdida de los beneficios derivados de la transición al no contar la demandante con 15 años de cotización o servicios a 1.º de abril de 1994. Es decir, así se hubiese trasladado la demandante al día siguiente de la reasesoría, de todas formas ya había perdido la transición.*

*En segundo lugar, porque la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad. Como se dijo, el afiliado requiere para tomar decisiones de la entrega de datos bajo las variables de tiempo e información, que le permitan ponderar costos, desventajas y beneficios hacia el futuro. Desde este punto de vista, un dato solo será relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda al destinatario su máximo de utilidad. Por el contrario, si la asesoría no se otorga oportunamente y, por tanto, pierde su utilidad, ello equivale a la ausencia de información.*



*Por otro lado, no es de recibo el planteo de Protección S.A., cuando sostiene que una vez realizó la reasesoría, Myriam Arroyave Henao no mostró interés en la ineficacia de la vinculación al RAIS, al conservar su status de afiliada durante un tiempo, Se dice lo anterior ya que la sugerencia de Protección S.A. de regresar al RPMPD, se produjo el 26 de noviembre de 2003, y el formulario para la nueva afiliación al ISS se diligenció el 14 de enero de 2004 (f. 0 97), es decir, la interesada no dejó transcurrir dos meses desde que recibió asesoría. Por lo demás, este lapso es razonable, pues dada la relevancia de esta determinación, era natural que la accionante se tomara un tiempo de reflexión, buscara información y consejo profesional para, finalmente, adoptar su elección.*

Con sustento en estos presupuestos, esta Colegiatura comparte la decisión proferida por el *a quo*, esto es, la de ineficacia, de ahí que habrá de confirmarse el punto, pues basta la mera ausencia de información al afiliado, clara, precisa y completa, para que se produzca la irregularidad del acto de cambio de régimen pensional, situación que fue exactamente la que ocurrió en el presente caso, tal como se corrobora de las exigencias existentes al momento del traslado (véase apartes de la decisión precedentemente citada) con la prueba obrante en el expediente, en especial el interrogatorio de parte, del cual por cierto no se infiere confesión alguna, y la solicitud de traslado (fl. 223), en el aparte “VOLUNTAD DE SELECCIÓN Y AFILIACION”, dado que a este tipo de leyendas o escritos carecen de eficacia para probar las informaciones exigidas, por las razones que precedentemente quedaron expuestas.

Esto que se dice, entonces, conlleva a que las partes deben ser restituidas al estado anterior (art. 1746 del CCC), esto es, que la afiliación de la demandante con Colpensiones, no solo nunca sufrió alteración alguna, sino que la entidad demandada que actualmente maneja la cuenta de ahorro individual de la demandante, esto es, PORVENIR S.A., deberá devolver a la administradora del RPMPD, además de todas las cotizaciones, incluyendo sus rendimientos y lo deducido por comisiones de administración, las sumas de dinero que retiene o haya retenido para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, seguros previsionales y demás conceptos descontados, y Colpensiones a recibirlos, sirviendo como sustento las razones que al respecto ha dado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, v. gr. en sentencia SL1421-2019, Rad. 56174, en la cual se dijo lo siguiente:

*“Sobre las consecuencias de la nulidad del traslado entre regímenes esta Sala en sentencia SL, del 8 de sep. 2008, rad. 31989, reiterada en varias oportunidades, adoctrino:*

*[...]*

*“La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones,*

*bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.*

*“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.*

Y de manera más precisa, en cuanto a todos los conceptos antes anotados, en sentencia del pasado 29 de julio (SL 2877 2020, Rad. 78667), expresó:

*“En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.*

*Ahora, los efectos de la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional cubre a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el accionante en el RAIS, aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implica dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen; en otros términos, es la inscripción en ese esquema pensional la que se cuestiona como una sola, lo que involucra a las demás AFP, así ellas no hayan intervenido, se reitera, en la primera admisión. Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal.*

Y precisamente por esto último citado, es que Protección S.A. también deberá devolver las comisiones de administración que obtuvo mientras la demandante estuvo a ella vinculada, lo deducido por seguros previsionales, Fondo de Garantía de Pensión Mínima y demás sumas de dinero.

En cuanto a las excepciones de mérito propuestas por las partes opositoras, en general se declararán no probadas, unas por no envolver hechos extintivos o modificativos de los derechos reconocidos, entre ellas las de validez de la afiliación y buena fe; y otras, como la de prescripción, por estar unido al derecho pensional, que se ha estimado no

puede verse afectado por el mero trascurso del tiempo. Con respecto a esta última, en la sentencia inicialmente citada se anotó:

*“Conforme lo explicado, los afiliados al sistema general de pensiones pueden solicitar, en cualquier tiempo, que se declare la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales y, por esta vía, que se reconozca a cuál de los dos regímenes pensionales (RPMPD o RAIS) se encuentran afiliados. Lo expuesto no es algo nuevo en la jurisprudencia del trabajo, pues incluso desde la sentencia CSJ SL795-2013 ya la Corte había adocinado que <<el asegurado está legitimado para interponer, en cualquier tiempo, reclamos relacionados con la afiliación, las cotizaciones, el ingreso base de cotización y todos aquellos componentes de la pensión>>.*

*Hay que mencionar que así como la declaración de ineficacia es imprescriptible, los derechos que nacen de ello también tienen igual connotación. En efecto, conforme al artículo 48 de la Constitución Política, el derecho a la seguridad social es un derecho subjetivo de orden irrenunciable, premisa que implica al menos dos cosas: no puede ser parcial o totalmente objeto de dimisión o disposición por su titular (inalienable e indisponible), como tampoco puede ser abolido por el paso del tiempo (imprescriptible) o por imposición de las autoridades sin título legal (irrevocable). En este sentido, la jurisprudencia del trabajo ha sostenido que el derecho a la pensión o a obtener su valor real, puede ser justiciado en todo tiempo. (CSJ SL8544-2016).*

No existiendo otros puntos que resolver, y con las adiciones antes referidas, habrá lugar a confirmar la sentencia de primer grado venida en apelación y consulta, incluido lo dispuesto en materia de costas, ya que al tenor de lo establecido en el artículo 365 del C.G.P., aplicable por analogía en materia procesal laboral y de la seguridad social, una conducta de buena fe no es motivo para que éstas no se impongan.

Las costas en esta instancia estarán a cargo de las AFPs PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A., dado que el recurso de apelación interpuesto por las mismas no prosperó, tal como lo dispone el artículo 365-1 ibídem. Como agencias en derecho se fija la suma de un SMLMV en favor de la demandante y a cargo de cada una de ellas.

## DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia objeto de apelación y consulta, con la ADICIÓN que las devoluciones que deberán realizar la AFPs PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A. a

COLPENSIONES, deberán incluir también las sumas deducidas para el Fondo de garantía de Pensión Mínima, los seguros previsionales y demás conceptos retenidos, tal como quedó anotado en la parte motiva de esta providencia.

Costas en esta instancia a cargo de las AFPs PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A. Como agencias en derecho se fija la suma de un SMLMV a favor de la demandante y a cargo de cada una de ellas.

La presente decisión queda notificada en los **ESTADOS ELECTRÓNICOS** de que trata el artículo 9 del Decreto 806 de 2020.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIERREZ SALAZAR

Se certifica: Que la sentencia anterior fue notificada por  
ESTADOS N° 117 fijados el 7 de julio de 2021  
En la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

---

El secretario.